

Amenazas y oportunidades

a raíz de fondo de la crisis que padece actualmente el país es la ruptura de la legitimidad democrática. Su reconstrucción es la única posibilidad de conseguir la estabilidad social necesaria para emprender con éxito un proceso de crecimiento y desarrollo sustentable a través del cual lograr finalmente la superación de la pobreza y la realización de una sociedad moderna y humana, libre, justa y solidaria.

La legitimidad política a la que nos referimos no se confunde simplemente con la "legalidad", el origen electoral o la popularidad de los gobiernos. Es más bien el fundamento difuso del régimen de toma de decisiones públicas, que posibilita que éstas puedan ser aceptadas y asumidas libremente por la sociedad, manteniendo las diferencias y las disconformidades propias de la pluralidad social.

Es precisamente ese fundamento de la cohesión social lo que está en cuestión. Por ello en la sociedad han aparecido dos polos extremos que representan modelos de organización social que se conciben como irreconciliables entre sí. Al frente de esta polarización se ubican sendos actores políticos enfrentados en una lucha por el poder que pretenden acumularlo sin dejarle espacio al otro.

Sin embargo, la polarización no alcanza a toda la sociedad; más o menos una mitad de ella se ubica en otro horizonte y aspira una salida negociada y pacífica al conflicto. Se trata de un grueso sector de la sociedad que desconfió de las unilateralidades y radicalizaciones de am-

bos bandos, que quiere encontrar soluciones reales a los problemas, y que en su gran mayoría no acepta volver al pasado.

El vía crucis del referendo presidencial

Una vez superado el "choque de trenes" de los sucesos de abril y diciembre de 2002, y establecidos los acuerdos de mayo del 2003, se aceptó que la posibilidad de activar un referendo revocatorio del mandato presidencial, siguiendo lo pautado en el ordenamiento constitucional vigente, ofrecía un mecanismo democrático idóneo y eficaz para poner en manos de la sociedad la decisión sobre los proyectos políticos en pugna y la evaluación de la gestión de sus actores.

Esta decisión fue acogida con entusiasmo y esperanza por la mayoría nacional, por bastantes de la oposición e incluso por algunos dentro del sector chavista. Los primeros pasos dados en esta dirección alentaron el optimismo: la designación de la Directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de un proceso de negociación entre el chavismo y la Coordinadora Democrática, el rápido procesamiento de la solicitud de referendo presidencial, la fijación de la fecha para la recolección de las firmas convocantes y la elaboración de la normativa respectiva.

Una vez realizadas las jornadas de recolección de firmas, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre del 2003, se pudo verificar por parte del CNE y de la vocería oficial, incluyen-

do la voz del propio Presidente de la República, una obstinada resistencia para reconocer el hecho manifiesto de que se habían recogido las firmas suficientes para activar el proceso. A partir de allí se inicia un espinoso vía crucis de obstáculos y dificultades, basados en gran medida en la percepción justificada de la parcialización del árbitro electoral. Algunos episodios presagiaban la agudización de diversas formas de violencia política y la ruptura del juego democrático. Sin embargo, desde ambos bandos se impuso la necesidad de dialogar y negociar las condiciones en que debía concluirse justamente la consulta realizada y el reconocimiento de sus resultados.

En las semanas inmediatamente previas a los reparos las tensiones volvieron nuevamente a crisparse. Desde el gobierno se emprendió una fuerte campaña de descrédito contra la observación y facilitación que estaban brindando la OEA y el Centro Carter. También las presiones abiertas y directas que desde el gobierno se ejercían contra los que habían firmado, negándoles la posibilidad de acceder a los servicios o contraprestaciones estatales, irritó más los ánimos. El discurso político tanto de los dirigentes oficialistas como de la oposición, convertía la contienda electoral en una especie de campaña bélica decisiva.

Los reparos se realizaron en medio de estas tensiones. El 6 de junio en la tarde, el CNE a través de los resultados preliminares prácticamente anunciaba la convocatoria al referendo presidencial. En medio de fuertes presiones de algunos grupos y personas del entorno gubernamental, el Presidente de la República se dirigió al país para anunciar la aceptación de los resultados y su disposición para acudir a la consulta refrendaria. Nuevamente la lógica política se impuso sobre la tentación del uso de la fuerza como fundamento para conservar el poder.

Las amenazas

Recordar esta historia conocida por todos sólo pretende poner de manifiesto los peligros que han amenazado y continúan amenazando la posibilidad de que el referendo presidencial constituya una salida democrática, pacífica y electoral. En

primer lugar, el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia, a través de los reglamentos y sentencias emitidos respectivamente, han supuesto de entrada la mala fe del elector a través de la sospecha de fraude. Con lo cual han complicado y siguen enredando más de lo necesario el ejercicio de la voluntad popular, hasta llegar a poner en peligro las posibilidades reales de su expresión.

Preocupan también las diversas presiones que se han ejercido y se siguen desplegando sobre el presidente Chávez. Unos insisten en que endurezca su posición sobre el referendo revocatorio y exija condiciones más rigurosas para su realización. Otros proponen simplemente el desconocimiento de los resultados bajo la justificación de que se trata de un fraude más de los tramposos de siempre. Es de lamentar cómo muchos dirigentes del MVR y del Comando Ayacucho, dejando de lado la más elemental lógica, siguen empleando los argumentos más estrambóticos para afianzar sus posiciones en la opinión pública.

Más preocupante aún son los que proponen darle un golpe a la mesa y apagar la lámpara de una vez, haciendo uso de la violencia y la represión para amedrentar y acallar a los adversarios. Nos atrevemos a decir que la escalada de violencia que se desató en el Centro de Caracas el día 6 de junio pretendía indicarle este camino al Presidente.

En este contexto se explica la respuesta del Presidente. Los primeros mensajes, tanto el del jueves 6 de junio en la noche como el del domingo siguiente, iban dirigidos principalmente a los suyos. Allí se aceptan los resultados y, como siempre pasa con los que pierden, se intentó convertir la derrota sufrida en victoria. Es necesario reconocer, como lo ha hecho la comunidad internacional, que esta decisión del Presidente, en contra de todas las presiones, salvó la existencia del juego democrático y, a través de él, la paz en el país.

Sin embargo, hablaba para los suyos y no para el conjunto del país. El derrotero a seguir se propuso como una gran batalla que, a ejemplo de la de Santa Inés, vencería con astucia al enemigo. A éste, por cierto, se le identificó con el diablo con quien se debía luchar hasta vencerlo como lo hizo Florentino en la cono-

cida copla llanera. Lo que preocupa es precisamente este empeño en mantener un discurso sólo para sus simpatizantes y dentro de la lógica de la confrontación, sin abrirse a las razones de fondo que los adversarios han expresado en forma democrática. La jaula revolucionaria mantiene atrapados tanto al Presidente como a sus seguidores dentro de sus creencias, valores e ideas.

Lo que se evidencia hasta ahora, por parte del gobierno es que la aceptación de las reglas del juego democrático sigue siendo una táctica de sobrevivencia, "una táctica militar retrógrada". Esta actitud se manifiesta en otras graves perversiones del comportamiento político gubernamental. Cabe señalar especialmente la decisión descarada por parte del Presidente de configurar su comando de campaña con funcionarios gubernamentales y recursos públicos, lo que implica poner todo el peso del Estado al servicio de una parcialidad política que está sometida precisamente a la consulta democrática.

Por su parte, en algunos voceros de la oposición se ha desatado una actitud prepotente derivada de creer que se ha ganado una guerra y que el triunfo es irreversible en todos los procesos electorales subsiguientes. En particular, casi todos los voceros oficiosos de la Coordinadora Democrática siguen entendiendo el referendo presidencial como un mecanismo fundamentalmente dirigido a salir de Chávez, lo que refuerza la dinámica de la polarización y le quita importancia a la tarea de construir una alternativa política efectivamente competidora. Algunas voces se han levantado para indicar la necesidad de construir una estrategia política en la que se encuadre adecuadamente la consulta refrendaria como elemento en un conjunto amplio de posibilidades. También algunos voceros de la Coordinadora Democrática han insistido en que es hora de hablar con los chavistas y para los chavistas.

Las oportunidades

En medio de las amenazas de violencia ha prevalecido la lógica política. La gran mayoría del país ha aceptado los resultados de los reparos y ve con optimismo el que se hayan respetado las reglas del juego

democrático. Nuevamente la esperanza está puesta en la consulta electoral refrendaria como mecanismo para encontrar una salida a la crisis política que mantiene paralizadas las posibilidades de la sociedad.

Pero existen dos posibilidades de entender el referendo: la victoria sobre el otro de manera que se imponga mi opción o la victoria sobre el otro asumiendo lo que tiene de legítima su propuesta, superando así la propia insuficiencia. Vencer al otro sin asumir sus virtualidades es perpetuar este callejón sin salida. La alternativa superadora está en asumir lo bueno del otro y a los otros.

El presidente Chávez tiene delante de sí una gran oportunidad. Puede convertir el referendo de revocatorio en aprobatorio, como él mismo lo ha dicho. Pero para ello debe transformar aquellos aspectos de su proyecto político que han sido percibidos por un sector importante de la población como unilaterales y amenazantes. Es decir, debe democratizar su proyecto, hablar a toda la sociedad e incluir el conjunto de sus expectativas en su discurso y propuestas. Su discurso sobre la justicia social y el protagonismo popular debe articularse mejor con el imaginario moderno vigente y hacerse compatible con los intereses legítimos de otros sectores de la sociedad.

La Coordinadora Democrática tiene también una gran oportunidad. Para ello debe darle contenido específico y concreto a sus exigencias de democracia, libertad y desarrollo moderno de la sociedad. Un contenido compatible con la justicia social e incluyente de los pobres. Un contenido que se proponga entusiastamente como superador de la propuesta con la que compete. Un contenido, en fin, que se propone a través de un liderazgo creíble, que denote compromiso y se sustenta sobre un acuerdo unitario.

Para esa gran cantidad de electores que se ubica en el centro del espectro político también existe una gran oportunidad, en la medida en que es capaz de "vender caro su voto," es decir, de exigir una propuesta de parte de los competidores políticos que se ajuste a sus aspiraciones. Esta parte de la sociedad debe hacer llegar al debate político sus expectativas, lo cual supone incrementar su capacidad